

Concepción, veinticinco de julio de dos mil veintidós.

VISTOS:

En la presente causa laboral RIT T-323-2020, del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, se ha dictado sentencia con fecha 14 de febrero de 2022, la cual se pronunció sobre la denuncia por vulneración por derechos fundamentales interpuesta por Lucía Gotelli Alvarado, en representación de doña Anita Alejandra Ferreira Cabrera, en contra de la Universidad de Concepción, representada legalmente por Carlos Saavedra Rubilar, que declaró textualmente: I. Que se rechaza la excepción de caducidad opuesta por la demandada, sin costas por motivo plausible para litigar. II. Que se acoge parcialmente la demanda solo en cuanto se declara que el empleador demandado incurrió en acoso laboral en contra de la demandante, vulnerando su derecho a la integridad física y psíquica, contenido en el artículo 19 N°1 de nuestra Constitución Política de la República, ordenándosele restituir, para este año académico 2022, a la demandante al cargo de Directora del Programa de Español como Lengua Extranjera ELE-UDEC y rechazándose en todo lo demás. III. Que cada parte pagará sus costas al no haber sido totalmente vencida. IV. Remítase copia de esta sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro, oficiándose al efecto.

En su contra ambas partes dedujeron sendos recursos de nulidad, enderezados en las causales que más abajo se detallan.

Se procedió a la vista del recurso en la audiencia respectiva, asistiendo y alegando los abogados de ambas partes.

Y CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD DE LA PARTE DEMANDANTE:

1º.- El recurso de la demandante se sustenta en que la sentencia fue dictada con manifiesta infracción a las normas sobre la apreciación de la sana crítica, de conformidad a lo señalado en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo. Solicita la recurrente se acoja el recurso y



se anule la sentencia citada, en aquella parte que no dio lugar a la indemnización de perjuicios por daño moral y se dicte la de reemplazo.

2º.- Respecto del vicio que adolece la sentencia expone la actora que este se produce por cuanto la sentenciadora no valora en su conjunto la prueba testimonial y documental aportada en autos y que prueban claramente que se produjo un daño moral, como consecuencia de haber vulnerado el empleador los derechos fundamentales de la actora en forma reiterada y sostenida en el tiempo y que este daño debe ser indemnizado.

Agrega que la falta de análisis y valoración de diversos medios de prueba incorporados y que no fueron excluidos ni objetados en la instancia procesal pertinente son suficientes para acreditar la referida petición.

Añade que no se aprecia un análisis razonado conforme al mandato legal de toda la prueba rendida, ni su relación, ni la determinación de ninguno de los parámetros que establece el legislador en el artículo 456 del Código del ramo.

Señala en este sentido que en el considerando séptimo número diez, la jueza expone que no está acreditado el daño moral sin dar valor a la declaración de testigos y del documento consistente en ficha clínica de la ACHS, la cual da cuenta de la aflicción, de la angustia, de la baja autoestima que el hostigamiento causó a la recurrente.

Hace presente que las conclusiones del tribunal en el fallo permiten concluir que la naturaleza del daño es de tipo emocional, psicológico, toda vez que ha sido estigmatizada y desacreditada frente a sus pares, no obstante ser una académica de alto nivel.

A su turno, considera que la gravedad del daño causado está íntimamente ligada a la extensión del mismo, esto es, de conductas de acoso laboral sostenidas, reiteradas en el tiempo, de aquí que para que la sentencia hubiese sido armónica en su totalidad, la determinación del daño moral debió ser analizado en conjunto, a la luz de las reglas de la sana crítica cuyo efecto es la indemnización de este daño causado.



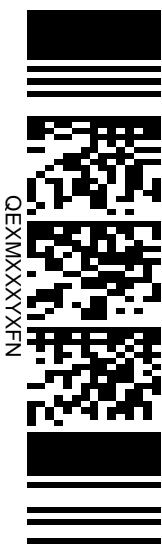
Refiere también la recurrente fragmentos de la declaración de los testigos que depusieron en el sentido de sus alegaciones.

Por otra parte, fundamenta el presente recurso indicando que de acuerdo a lo establecido en el artículo 456 del Código del Trabajo, es efectivo que el juez del trabajo pondera libremente la prueba, y al momento de fijar prudencialmente el daño moral, en su cuantía es soberano, sin embargo, estas facultades que le entrega el legislador no son absolutas de manera que el análisis y determinación deben hacerse respetando los principios de la sana crítica, pues tiene las importantes limitaciones a que se refiere el citado artículo 456, de forma que un razonamiento que se aparte de la lógica, de la ciencia o de la experiencia, vicia el fallo si ello ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

En tal sentido, entiende que en los considerados QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, de la sentencia en cuestión se comprueba que el sentenciador, al ponderar la prueba rendida ha infringido el mandato legal que se le impone, de ajustar su valoración de la prueba rendida conforme a las reglas de la sana crítica, ya que de haber respetado este principio, necesariamente habría concluido la procedencia de la indemnización de perjuicios por concepto de daño moral fijando la suma solicitada por mi parte o la suma que haya estimado conforme al mérito del proceso.

Agrega que el principio infringido por la sentenciadora al no conceder la indemnización por daño moral solicitada es las máximas de experiencia, todas aquellas directrices obtenidas a partir del conocimiento público y colectivo, esto es, prácticas mayoritariamente difundidas y conocidas al interior de la comunidad. Se sostiene que se vulnera el principio de no considerar las máximas de experiencia y que este vicio se origina en los considerandos SÉPTIMO y OCTAVO, y se menciona jurisprudencia dictada, a su juicio, en línea con las alegaciones vertidas.

Acto seguido y en cuanto a la argumentación relativa a la forma en que el vicio influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, afirma que la infracción denunciada es manifiesta por cuanto basta una lectura de los considerando SÉPTIMO y OCTAVO para concluir que, en la sentencia, el tribunal señala que la actora sufrió acoso laboral y



QEXMXXYYFN

que se vulneraron sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política del Estado, sin embargo, no accede a la vulneración establecida en el artículo 19 N°4 de la misma Carta, y determina que no se ha acreditado la procedencia de una indemnización por daño moral.

Estima que, de no existir este vicio, la sentencia debió decretar la procedencia de la indemnización por daño moral solicitada en el libelo por esta parte, haciendo lugar a lo pedido o fijando una suma mayor o menor conforme al mérito del proceso.

Por último, solicita que esta Corte invalide la sentencia recurrida solo en aquella parte que no da lugar a la indemnización por daño moral y en su lugar se dicte una sentencia de reemplazo que declare la procedencia de la indemnización por daño moral solicitada en el libelo de denuncia, o se fije una suma mayor o menor, determinada por el tribunal de alzada conforme al mérito del proceso, todo ello con expresa condenación en costas.

3°.- Que, de conformidad a la causal de ineficacia invocada, esta Corte hace presente que el recurso de nulidad es un medio de impugnación procesal de carácter extraordinario, de derecho estricto y de invalidación que procede sólo contra las sentencias definitivas y por las causales expresamente señaladas en la ley y su objeto es invalidar total o parcialmente el procedimiento junto con la sentencia definitiva o sólo esta última en su caso.

Consecuente con lo anterior, el legislador ha establecido una serie de requisitos para que el recurso de nulidad pueda prosperar, debiendo la parte que lo deduce, junto con dar cumplimiento a las exigencias contempladas en el artículo 479 del Código del Trabajo, formular peticiones concretas, todo lo cual, fija la competencia de esta Corte.

4°.- Que, el artículo 478 del Código del Trabajo dispone que es posible anular el fallo, cuando en él existiere una infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a la sana crítica.



De este modo, el tribunal superior debe constatar que en el razonamiento que le sirve de base al fallo del juez laboral se haya respetado la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, lo que debe quedar expresado en la formulación de la sentencia definitiva, tarea que exige un análisis conciso y detallado de la construcción de las argumentaciones que han llevado al juez a sentenciar en uno u otro sentido, y que evidentemente va más allá de verificar que en la sentencia se ha realizado una simple relación de las pruebas rendidas.

5°.- Que, en la especie, el recurrente ha invocado como causal de nulidad la del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia definitiva ha sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

A su turno, el artículo 456 del Código del Trabajo dispone que el tribunal debe apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica e impone las siguientes exigencias: a) debe expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestimen y; b) en general, debe tomar en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca, lógicamente, a la conclusión que convence al sentenciador.

6°.- Que, conforme al citado artículo 456 del Código del Trabajo, el sistema de valoración de la sana crítica no admite la posibilidad que el Tribunal lleve a cabo actuaciones antojadizas y/o arbitrarias, que no se condigan con el respeto de los derechos fundamentales de los litigantes.

De este modo, el sistema se encuentra construido sobre el reconocimiento expreso de ciertas barreras limitantes del desborde de las atribuciones del sentenciador, las que principalmente son el respeto de las reglas básicas impuestas por la lógica, razones científicas, técnicas o las máximas de la experiencia.

El tribunal debe expresar con claridad y precisión el desarrollo del fundamento de la decisión adoptada, lo que permite el control de la



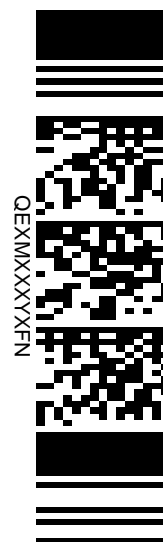
misma y su aceptación por los afectados, como, asimismo, la adecuada presentación de recursos por las partes del litigio, según sea el caso.

7°.- Que, reiteradamente se ha sostenido por nuestra Excma. Corte Suprema que la forma de apreciar la prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica es materia propia de los jueces del grado, constituye una facultad que les compete en forma exclusiva y que no admite, en general, revisión por medio del recurso de nulidad, salvo que en tal ponderación y establecimiento subsecuente de los hechos se hayan infringido las leyes reguladoras de la prueba, esto es, las normas científicas, técnicas, simplemente lógicas o de experiencia en cuya virtud se asignó valor o desestimaron los elementos de convicción aportados al litigio.

8°.- Que, dicho lo anterior, examinado el fallo impugnado, asiste la convicción a esta Corte que el Juez de fondo desarrolló lógicamente la cuestión materia de la controversia, concerniente al recurso deducido, analiza toda la prueba pertinente aportada por los litigantes y entrega las razones fundadas en las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, por las cuales adscribe a las de la demandada y desestima las del actor, explicando por qué arriba a la convicción que lo conduce a rechazar la demanda.

En otros términos, se llegó a la conclusión que se reprocha en el recurso mediante la utilización de un procedimiento lógico que permite la producción del razonamiento utilizado al efecto y, por ende, su control intersubjetivo, lo que implica que se cumplieron con los parámetros formales del mencionado artículo 456, y, en lo concreto, no se vulneraron las máximas de la experiencia, ni las reglas de la lógica.

9°.- Que, en efecto, una cosa es que la conclusión a la que se arribó sea defectuosa en la construcción del respectivo razonamiento cuestión que en la especie no sucedió, y otra muy distinta que el impugnante no esté de acuerdo con el contenido de la misma, que es precisamente lo que, en concepto de esta Corte, acaece en este caso con ocasión del recurso incoado.



10°.- Que, conforme a lo señalado, el recurso de nulidad intentado por la reclamante en contra de la sentencia definitiva de autos, no puede prosperar.

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD DE LA PARTE DEMANDADA:

11°.- La demandada fundamenta su recurso en dos causales interpuestas una en subsidio de la otra.

Primero, el recurso se sustenta en la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, “cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”.

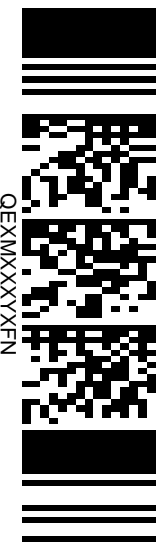
En subsidio de la anterior, el recurso se sustenta en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, por haberse pronunciado la sentencia definitiva “con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”.

12°.- Respecto de la primera causal de nulidad, sostiene la recurrente que, por esta vía de impugnación no se pretende modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

Expone que el error del tribunal no se encuentra en el establecimiento de los hechos, sino en la calificación jurídica que se ha hecho de ellos.

Agrega que de los numerosos hechos o supuestos hechos que indicó la parte denunciante en su libelo para fundar tanto la existencia de acoso laboral, como la de vulneración de derechos fundamentales, en la sentencia finalmente son cuatro los que el tribunal identificó como conductas de hostigamiento o agresión, constitutivas de acoso, las cuales distingue de acuerdo al sujeto activo de los mismos, y que si bien no controvierte en cuanto a las circunstancias, si lo hace desde la perspectiva de la calificación jurídica que el tribunal ha hecho de ellas.

Señala que si bien puede compartirse que, en definitiva, el responsable de que exista acoso es el empleador, en el sentido de



haber faltado a su obligación para con el trabajador de proporcionarle un ambiente libre de riesgos; no debe olvidarse que el empleador, salvo en aquellos casos excepcionales en que se identifica plenamente con una persona natural única, es una ficción, es un concepto jurídico y por ende, en la realidad de los hechos, es imposible que sea autor de conductas específicas, sea acciones u omisiones, de hostigamiento o agresión. Son las personas las que cometen acciones, quienes pueden hostigar, no las empresas ni las instituciones jurídicas.

Añade que, en el caso de autos, se atribuyen conductas específicas a dos personas distintas (naturales, reales), a saber, la Directora del Departamento de Español y el Vicerrector de la Universidad. Personas que, si bien, para efectos legales y discutiblemente pueden poseer ambas la potestad de representar al empleador para efectos laborales en los términos del artículo 4° del Código del Trabajo, en la realidad de las cosas, se trata de dos personas y de dos cargos del todo distintos y separados.

Refiere que, en una institución del tamaño de la Universidad de Concepción, resultan ser cargos con esferas de competencias diferentes y en niveles jerárquicos también distintos, que no trabajan siquiera en los mismos espacios, atribuciones, ni con las mismas personas de manera directa.

Sostiene que dicha calidad atenta contra la construcción realizada por el tribunal del acoso laboral en este caso, pues resulta forzado que las acciones de estas dos personas simplemente se sumen aritméticamente, dando paso al elemento de la “reiteración” que exige el acoso, sin que se haya justificado o explicado, ni por la parte denunciante, ni por el tribunal, que haya existido alguna concertación o acuerdo entre ellas en orden a hostigar o dañar a la demandante.

Menciona que los hechos inconexos (provenientes de las personas antes indicadas), de los que el tribunal infiere la existencia de acoso, por la falta de vinculación o concertación entre los actores involucrados, tanto en motivación como en ámbito de acción, por carecer de la necesaria concatenación y entidad necesaria como para producir menoscabo, maltrato, humillación, o afectación en las



oportunidades de empleo, es que se hacía necesario que el tribunal de la causa negare lugar a la declaración de acoso laboral en los términos del artículo 2° del Código del Trabajo y, en consecuencia, negare lugar a la acción intentada.

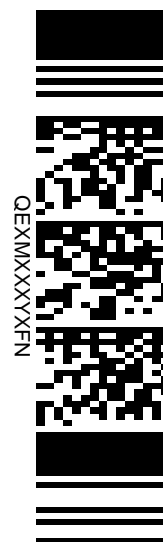
Arguye que, en razón de lo anterior, puede concluirse que existe un vicio en la sentencia recurrida, que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo pues, la correcta calificación jurídica de los hechos del juicio es que éstos no constituyen acoso laboral en los términos del artículo 2° del Código del Trabajo.

Por último y a modo de petición concreta solicita se declare que la sentencia recurrida adolece de un vicio que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por haberse efectuado una calificación jurídica errada de los hechos del juicio, por lo que debe ser invalidada, y en su lugar, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que declare que los hechos acreditados no son constitutivos de acoso laboral en contra de la denunciante Sra. Anita Ferreira Cabrera, por lo que, en consecuencia, no ha podido existir vulneración de derechos fundamentales en su contra, conduciendo al rechazo de la acción.

13°.- En subsidio de la causal anterior, la causal de nulidad impetrada, tal como se mencionó, es la que consta en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, por haberse pronunciado la sentencia “con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”.

Señala la recurrente que la norma infringida es aquella contenida en el artículo 104 del D.F.L. N° 2 de 2010 del Ministerio de Educación, en relación con el artículo 2 letra a) de la Ley N° 21.091, ambas, normas que consagran legalmente el principio de la autonomía universitaria, las cuales transcribe.

Indica que la decisión del tribunal de que la Universidad debe nombrar a la profesora Ferreira como Directora de uno de sus programas, atenta contra la facultad de la Universidad de regirse a sí misma de acuerdo a su propia regulación y de determinar su propia organización académica y administrativa.



Agrega que el nombramiento de una persona en un cargo directivo al interior de la Universidad, incluso, puede afectar la faceta económica de la autonomía universitaria, al tener, un cargo como aquel de que se trata en autos, atribuciones en materia de administración de recursos institucionales como aquellos destinados a la ejecución de un determinado programa universitario.

Añade que de acuerdo a los Estatutos de la Corporación y a su Reglamento Orgánico, es al Rector de la Universidad a quien compete de manera exclusiva nombrar a los distintos Directores y Directoras de ésta, lo que se formaliza a través de un Decreto, que es un acto carente de causa explicitada.

Arguye además que el considerar la cesación de la Sra. Ferreira en el cargo como un acto arbitrario, prescinde de esta realidad y de esta regulación interna universitaria. En este sentido, entiende que la decisión, por lo tanto, atenta contra esta regulación que la Universidad se ha fijado e interviene directamente en facultades y competencias que son privativas del Rector como máxima autoridad universitaria.

Complementa haciendo presente que la institución jurídica en comento, si bien tiene rango legal, tiene también un trasfondo constitucional cual es el artículo 1° inciso 3° de la Constitución ue consagra el deber del Estado de reconocer y amparar a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y de garantizarles la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

Formula que aún en el evento de determinarse que existió acoso laboral en contra de la denunciante, son otras las medidas reparatorias las que debieron aplicarse, por cuanto el nombramiento de funcionarios en cargos directivos es una cuestión que, conforme a las reglas establecidas en los Estatutos de la Corporación Universidad de Concepción, así como su Reglamento Orgánico, compete de manera exclusiva al Rector en ejercicio.

Finaliza exponiendo que el vicio indicado, influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo pues, el tribunal, de haber observado las distintas manifestaciones de la autonomía universitaria que consagran la disposiciones antes citadas, aun habiendo arribado a



idéntica conclusión en cuanto a la configuración de acoso, habría aplicado medidas reparatorias de naturaleza distinta, que no importaren afectar la autonomía de la Universidad para autorregularse y determinar su propia administración.

A modo de petición concreta y con ocasión de la causal invocada, solicita acoger el recurso de nulidad interpuesto y, en su mérito, anular parcialmente la sentencia recurrida, por presentar ésta, en su parte dispositiva, un vicio de infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, el cual se configura al determinar, el tribunal de la causa, el nombramiento de la denunciante en un cargo directivo al interior de la Universidad, cuestión que, en observancia del principio de la autonomía universitaria consagrado en los artículos 104 del D.F.L. N° 2 de 2010 del Ministerio de Educación y 2 letra a) de la Ley N° 21.091, se habría omitido y, en su lugar, se habrían determinado medidas de naturaleza distinta. Solicita, además, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, imponiendo decisiones que no impliquen injerencia en la facultad de la Universidad de observar sus propios reglamentos.

14°.- Que, ahora bien, lo primero que cabe indicar en cuanto a la postulación invalidatoria de la recurrente, es que la causal de nulidad que propuso, esto es, “cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”, importa, desde luego, que el impugnante está aceptando los hechos establecidos a partir de la prueba legalmente incorporada al juicio y ponderada en la sentencia, ya que dicha infracción sólo se puede traducir, como se sabe, única y exclusivamente sobre un determinado aspecto jurídico de una proposición fáctica específica. Discurriendo sobre la base de esta causal, entonces, la llamada *questio facti* se trasunta en intangible para el tribunal que conoce de la nulidad y únicamente cabe discutir en esta sede sobre la denominada *questio juris*. Directamente en relación con esta temática, ha de tenerse muy presente que esta Corte en sede de nulidad se constituye esencialmente en “juez de legalidad” y no en “juez de mérito”, dado que los hechos establecidos en la sentencia por el tribunal de la instancia, tal como recién se dijo, resultan ser intangibles e inamovibles para estos juzgadores.



15°.- Que, pues bien, revisada la sentencia recurrida, aparece que la cuestión propuesta por la recurrente se aviene más bien con un aspecto de naturaleza fáctica y no jurídica, desde que, a partir de las probanzas incorporadas a la causa -y que la juzgadora de la instancia hubo de apreciar libremente, empero con sujeción a las reglas de la sana crítica racional-, arribó a la conclusión que los hechos acreditados configuraban un supuesto de acoso laboral de la naturaleza del resuelto en autos. Luego, no tratándose de un aspecto jurídico propiamente dicho, la causal de nulidad en examen no podría prosperar, por cuanto aquello implicaría ingresar en el análisis de los hechos respecto de los cuales el tribunal *a quo* goza de soberanía.

16°.- Que, por su parte, el motivo subsidiario de invalidación tampoco llevará mejor suerte, en la medida que, para su procedencia, y al igual que en el caso de la causal principal, se requiere ingresar en el análisis de los hechos que el tribunal *a quo* ha establecido en su sentencia, y los hechos, como se sabe, no pueden ser tocados por el tribunal revisor en esta sede de nulidad. Huelgan, entonces, mayores comentarios acerca del motivo de invalidación anotado.

Por lo expuesto y teniendo presente lo previsto en los artículos 474, 477 y 482 del Código del Trabajo, se declara:

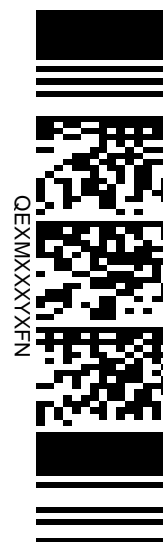
Que **SE RECHAZAN**, en todas sus partes, los recursos de nulidad interpuestos por las partes en contra de la individualizada sentencia definitiva de 14 de febrero de 2022, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, y, en consecuencia, que esta sentencia no es nula.

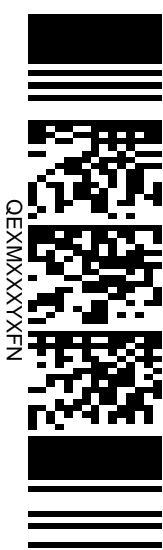
No se condena en costas del recurso a los impugnantes, por estimarse que tuvieron motivos plausibles para recurrir.

Regístrese, notifíquese y devuélvase oportunamente por la vía correspondiente.

Redacción del abogado integrante Sr. Renzo Munita Marambio.

Rol N° 133-2022 – Laboral.

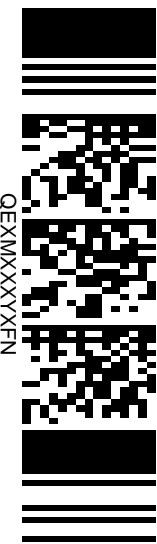




QEXMXXXXXFN

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por Ministra Matilde Esquerre P., Ministro Suplente Waldemar Augusto Koch S. y Abogado Integrante Renzo Esteban Munita M. Concepcion, veinticinco de julio de dos mil veintidós.

En Concepcion, a veinticinco de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>